

Boletín Oficial

DE LA PROVINCIA DE ORENSE.

Se publica los martes, jueves y sábados de cada semana.—Se suscribe en la imprenta de D. Cosmes Paz y Hermano, Fuente del Rey número 6 á 20 rs. trimestre para esta capital, y 30 para fuera franco de porte por trimestres adelantados.—Números sueltos á 12 cuartos el pliego.

PARTE OFICIAL.

PRIMERA SECCION.

PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS.

S. M. la REINA (Q. D. G.) y su augusta Real Familia continúan en el Real Sitio de Aranjuez sin novedad en su importante salud.

MINISTERIO DE LA GOBERNACION.

En el expediente y autos de competencia suscitada entre el Gobernador de la provincia de Leon y el Juez de primera instancia de su capital, de los cuales resulta:

Que el Gobernador de la expresada provincia, en vista del expediente instruido á instancia del pedáneo de Azadon, queriéndose de que José Fernandez y Gregorio Díez habían corrado unas fincas en las que el Concejo y vecinos del citado pueblo tenían derecho al aprovechamiento del segundo pelo y á desgarrar y trillar sus mieses, y teniendo presente la disposición 3.ª de la Real orden de 11 de febrero de 1836, resolvió en 2 de octubre de 1855 amparar á los sujetos referidos en el libre uso de sus propiedades, no considerando título suficiente el uso ó costumbres en que fundaba sus gestiones el pedáneo.

Que el mismo Gobernador, en vista de otro expediente promovido por D. Tomás Alonso y D. Juan Roman, oponiéndose á que se concediese el cierre de praderas en término de Azadon á los mencionados Fernandez y Díez, confirmó en 23 de junio de 1856 su anterior providencia, en atención á que no eran títulos y si actos posesorios los que se presentaban para que quedase esta providencia sin efecto, accediendo á los reclamos del derecho que les asista para que lo dedujesen ante los Tribunales de justicia.

Que en 28 de abril de 1858 el Juez de primera instancia de Leon, en los autos entre José Fernandez y los estrados del Tribunal, en ausencia y rebelia de Juan Roman y Atapasio Campelo, en concepto de pedáneo y apoderado del pueblo y vecinos de Azadon, sobre libre uso y aprovechamiento de unos prados en término del mismo Azadon y sitios llamados de las Eras, declaró que los prados pertenecían en pleno dominio y propiedad á

José Fernandez, como el derecho de usar y disfrutar las mismas segun le pareciere en concepto de tal dueño; teniendo en consideración que en este concepto de dueño tiene facultad de cerrarlos y acotarlos sin perjuicio de las servidumbres que sobre ellos haya; que las servidumbres se han de probar por los medios establecidos al efecto, y que Roman y Campelo no habían comparecido á presentar prueba ó excepción alguna.

Que en virtud de instancias de Rafael Velasco, vecino de Azadon de 21 de marzo de 1859, y previos repetidos informes del Ayuntamiento de Cimanes del Tejar y audiencia del mismo José Fernandez, de que se viene hablando en las tres anteriores resoluciones, se acordó por el nuevo Gobernador de la provincia en Mayo de 1860 la restitucion al aprovechamiento comun y al estado anterior del prado denominado la Pinta, cerrado por el mencionado Fernandez, en término de Azadon, previniendo al Alcalde de Cimanes del Tejar que en exacto cumplimiento de otra providencia administrativa que había recaído y de las atribuciones que la ley le confiere, lo llevase á efecto.

Que durante la tramitacion de este último expediente, y despues de haber expuesto José Fernandez lo que estimó conveniente en virtud de la audiencia que le fué otorgada, intentó el mismo y tuvo efecto en 23 de marzo de 1860 ante el Juez de paz de Cimanes del Tejar un acto de conciliacion con un Regidor del Ayuntamiento en funciones de Alcalde, el pedáneo de Azadon y un número de vecinos que dijeron ser la mayor y mas sana parte del propio pueblo, en que expuso casi literalmente el demandante que en virtud de autorizacion unas veces administrativa y otras judicial, cerró dos prados que posee en el sitio de las Eras de Azadon, y por falta de personalidad en los recursos que habían precedido por parte del pueblo fueron abiertos los prados por orden administrativa; y á fin de que no volviera á suceder, dirigia la actual demanda contra el Alcalde como representante de los bienes comunales, y contra el Concejo y vecinos como directamente interesados en las otorgadas de los prados, para que no se opusieran á su cierre y acotamiento; á lo que contestaron los demandados que no accedian por tener aprovechamiento comun sobre los mismos prados, y además la servidumbre de Eras, conviniéndose por fin en consentir el cierre y acotamiento del prado de la Pinta con ciertas condiciones.

Que á instancia de José Fernandez, fecha 15 de junio siguiente, se libró despacho por el Juez de primera instancia de Leon, dirigido en 18 del mismo mes al

Juez de paz de Cimanes del Tejar, para que hiciese saber al Alcalde y Concejo de Azadon que en el término de seis dias cumpliesen lo convenido en el acto conciliatorio, y que de no ejecutarlo se cumpliria á su costa, lo cual fue notificado al pedáneo y vecinos de Azadon.

Que por separado solicitó José Fernandez del Gobernador de la provincia la aprobacion de lo convenido en el juicio de conciliacion, y que quedase sin efecto la providencia administrativa de Mayo de 1860, y acudieron al mismo Gobernador Miguel y Santos Roman, pedáneo el primero y vecinos ambos de Azadon, á fin de que requiriese al Juez de inhibicion en el negocio.

Que el Gobernador, de acuerdo con el Consejo provincial, promovió al Juez á competencia, que fue declarada mal formada por Real decreto de 30 de enero de 1861, por no haber dado el Juez traslado al Alcalde del Ayuntamiento, con infraccion principalmente del art. 8.º del Real decreto de 4 de junio de 1817; y subsanado este defecto, ambas autoridades han vuelto á remitir sus respectivas actuaciones, insistiendo el Gobernador en reclamar el negocio porque se intenta privar al comun de Azadon de la posesion de un aprovechamiento, no en virtud de una sentencia dictada en juicio de propiedad, en que haya sido parte legítima, autora ó demandada, sino de una transaccion que, cualquiera que sea la forma en que se haya verificado, no puede tener efecto sin la aprobacion del mismo Gobernador á quien tambien correspondia su ejecucion.

Visto el art. 74, párrafo cuarto y décimo de la ley de 8 de enero de 1815, en que se consignan, entre las facultades del Alcalde, las de otorgar las escrituras de compras, ventas, transacciones y demás para que se halle autorizado el Ayuntamiento, y la de representar en juicio al pueblo ó distrito municipal, ya sea como autor, ya como demandado, cuando estuviere competentemente autorizado para litigar.

Visto el art. 81, párrafo noveno y último de la misma ley, que faculta á los Ayuntamientos para deliberar sobre transacciones de cualquiera especie que tuvieran que hacer el comun, debiendo comunicar sus acuerdos sobre este punto para la necesaria aprobacion al Gobernador de la provincia.

Visto el art. 201, párrafo 6.º de la ley de Enjuiciamiento civil, en que se prescribe que antes de promover un juicio debe intentarse la conciliacion ante el Juez de paz competente, exceptuándose los juicios en que esten interesados la Hacienda pública, los Pósitos, Propios, Comunes ó cualquiera otra clase de bienes

de establecimientos públicos de pueblos, de provincias ó del Estado:

Visto el art. 217 de la misma ley, segun el cual, contra lo convenido en el acto de conciliacion solo se admitirá demanda de nulidad:

Visto el art. 218, que establece que lo convenido en el acto de conciliacion se llevará á efecto por el Juez de paz si no excediese de la cantidad prefijada para los juicios verbales, y si excediere de esa cantidad por el Juez de primera instancia de la manera y en la forma prevenida para la ejecucion de las sentencias:

Considerando que, cualesquiera que sean los defectos de que pueda adolecer el acto de conciliacion de 23 de marzo de 1860, con arreglo á los citados artículos 74 y 81 de la ley de 8 de enero de 1815 y 201 de la ley de Enjuiciamiento civil, en tanto que no se pida y obtenga su nulidad ante la autoridad judicial por el mejor recurso á que haya lugar en derecho, es un acto obligatorio y atendida su naturaleza, no es el Gobernador, sino el Juez de primera instancia el encargado de ejecutar lo convenido en aquel acto mientras subsista, conforme á lo prescrito en el art. 218 además referido de la ley de Enjuiciamiento civil;

Conformándose con lo consultado por el Consejo de Estado en pleno,

Vengo en decidir esta competencia á favor de la Autoridad judicial, y lo acordado.

Dado en Palacio á 22 de enero de 1862.—Está rubricado de la Real mano.—El Ministro de la Gobernacion, José de Posada Herrera

(Gaceta de 17 de febrero último)

MINISTERIO DE LA GOBERNACION.

Subsecretaria.—Negociado 3.º

Remitido á informe de la Seccion de Estado y Gracia y Justicia del Consejo de Estado el expediente de autorizacion negada por V. S. al Juez de primera instancia de esa capital para procesar á D. Juan Docampo, Alcalde del distrito de Alvedro ha consultado lo siguiente:

«Excmo. Sr.: Esta Seccion ha examinado el expediente en que el Gobernador de la provincia de la Coruña ha negado al Juez de primera instancia de aquella capital la autorizacion que solicitó para procesar á D. Juan Docampo, Alcalde constitucional del distrito de Alvedro.

Resulta:

Que el Fiel de consumos del distrito acudió á dicha Alcaldía denunciando á su convecino Antonio Rodriguez por haber

GOBIERNO DE LA PROVINCIA.
CIRCULAR NUMERO 162.
 A pesar de mis reiterados anuncios y de las precauciones que se han adoptado por este Gobierno para evitar en la presente quinta la realización y hasta el intento de toda clase de abusos y estafas que son tan funestas para los funcionarios que intervienen en ella, como perjudiciales para las familias de los sorteados y para la moral pública, en el día 26 del actual Antonio Vazquez y Francisco Carrera, del Ayuntamiento de Cortegada, tuvie-

ron la docilidad de acceder a consignar en depósito la cantidad de ochenta y ocho duros, en el equívoco concepto de que con ellos podrían ser libertados del servicio de las armas sus hijos Juan y Francisco, números 10 y 15 de primera clase en el referido Ayuntamiento. Por las circunstancias especiales que concurrieron en el caso y que atenúan el hecho, he dispuesto se devolviese a los interesados la cantidad incautamente depositada, si bien sufrieron la correspondiente corrección gubernativa y no así la persona de cuyo poder se recogió el dinero, porque resultó exenta de toda culpabilidad.

Lo que he acordado publicar en este periódico oficial en consecuencia de lo dispuesto en mi circular número 145, publicada en el Boletín de 22 de abril último.

Orense, 2 de mayo de 1862.—
Francisco Javier Camuño.

CIRCULAR NÚM. 163.

Se encarga la busca y captura de Francisco Escobar (a) el Roque.

Orden público.—Negociado 4.º

Habiéndose fugado de la cárcel de Brihuega provincia de Guadalajara en la noche del 22 del actual el criminal Francisco Escobar (a) el Roque, cuyas señas se insertan a continuación, encargo a los señores Alcaldes, Guardia civil, empleados de vigilancia y demás dependientes de mi autoridad procedan a la busca y captura de dicho criminal, el cual pondrán en el caso de ser habido a disposición de este Gobierno con toda seguridad.

Orense, abril 30, de 1862.—
Francisco Javier Camuño.

Señas de Francisco Escobar (a) el Roque.

Edad 30 años, estatura regular, pelo rubio, barba muy poca, nariz regular, en la mano derecha tres anillos, viste pantalón de maho con rayas negras y elástica de bayeta amarilla.

CIRCULAR NÚM. 164.

Se encarga la busca de un cerdo y una cerda.

Vigilancia.—Negociado 4.º

Habiendo desaparecido al anochecer del día 28 de abril próximo pasado del campo que circunda la capilla de Nuestra Señora de los Remedios extramuros de esta capital, donde se hallaban pastando, un cerdo y una cerda, cuyas señas se expresan a continuación, encargo a los Sres. Alcaldes, Guardia civil, empleados de vigilancia y demás dependientes de mi autoridad procedan a la busca de dichos dos animales, y en el caso de ser habidos los entreguen a su dueño Joaquín González, vecino de esta ciudad, que vive en el parador del Norte.

Orense mayo 1.º de 1862.—
Francisco Javier Camuño.

Señas del cerdo.
Edad 8 meses, color negro, con dos manos blancas.

Idem de la cerda.
Edad 8 meses, color negro, racionablemente capada, valor de ambos 160 reales.

CIRCULAR NÚM. 165.

Ley de 7 de abril del año último, sobre enajenación de fincas rústicas y urbanas, y censos que el Estado tiene derecho a adquirir por efecto de la permutación acordada en el convenio celebrado con la Santa Sede en 25 de agosto de 1859.

Sección 6.ª—Negociado único.—Hacienda.

Por la Dirección general de Propiedades y Derechos del Estado con fecha 19 del actual se dice a este Gobierno lo que sigue:

Por el Ministerio de Hacienda se ha comunicado a esta Dirección general la Real orden siguiente:

«La Reina (q. D. g.) ha tenido a bien mandar se publique la ley que sigue.—Doña Isabel II, por la gracia de Dios y la Constitución, Reina de las Españas, a todos los que las presentes vieren y entendieren, sabed, que las Cortes han decretado y Nos sancionado lo siguiente:

Artículo 1.º—Los bienes de la Iglesia que el Estado tiene derecho a adquirir por efecto de la permutación acordada en el convenio celebrado con la Santa Sede en 25 de agosto de 1859, continuarán enajenándose de esta manera: las fincas rústicas y urbanas con arreglo a las leyes de 1.º de mayo de 1855 y 1.º de julio de 1856; y los censos según la de 1.º de marzo de 1859.

Art. 2.º—El producto de estas ventas se destinará a: 1.º Al reembolso y amortización de la deuda pública, con interés, en la forma que se establece por la presente ley.

2.º A cubrir el déficit de doscientos once millones de reales que en los recursos aplicados por la ley de 1.º de abril de 1859 al crédito de los millones de reales produjo la nueva aplicación que la ley de 29 de noviembre del mismo año dio al fondo de redención del servicio militar.

3.º A satisfacer la cantidad de cuatrocientos sesenta y siete millones de reales en que se amplían los créditos cubiertos por la expresada ley de 1.º de abril de 1859 del modo siguiente: reales de ochocientos millones para reparación de templos; diez para vasos y ornamentos sagrados, según rubrica y demás objetos para el culto de las iglesias parroquiales; doscientos cincuenta para el material de Marina; cincuenta para el de artillería; ciento para el de armamento; sujeción a la ley que se publique próximamente al efecto; diez y siete para el de telégrafos; veinte para la construcción de uno ó mas edificios, destinados a las Academias, Museos ó Biblioteca Nacional, según lo acuerde el Gobierno; total reales vellón cuatrocientos sesenta y siete millones.

Art. 3.º—De los productos que en virtud de esta ley se obtengan, se irán aplicando las dos terceras partes al reembolso y amortización de la deuda pública, y la otra tercera a satisfacer los 678 millones de reales a que se refieren los párrafos segundo y tercero del artículo anterior. Si esta tercera parte excediera de 678 millones de reales, el exceso se empleará también en el reem-

bolso y amortización de la deuda pública, así como lo que excedan los recursos de la ley de 1.º de abril de 1859 a los gastos en ella autorizados.

Art. 4.º—Los fondos que se aplican al reembolso y amortización de la deuda, se invertirán en compras que hará la Junta directiva de la misma con publicidad y concurrencia en los meses de enero y julio de cada año, empleando las cantidades recaudadas en el semestre anterior, por mitad en las deudas consolidadas y diferida al 3 por 100.

Art. 5.º—De los títulos de la deuda consolidada que la Junta recoja por compra ó que se reciban en pago de las ventas como equivalencia del metálico, según el art. 20 de la ley de 11 de julio de 1856, se convertirán 900 millones de reales nominales en inscripciones nominativas a favor de la Caja de Depósitos. Los demás títulos que se adquirieran serán desde luego amortizados.

Art. 6.º—Las inscripciones a favor de la Caja de Depósitos se entregarán a la misma, y su valor quedará al cargo al reembolso de la parte de la deuda flotante del Tesoro que procede de los descubiertos definitivos de presupuestos atrasados.

Art. 7.º—Las inscripciones se negociarán en la cantidad que fuese necesaria por medio de públicas licitaciones acordadas por el Consejo de Ministros a propuesta del de Hacienda, después de convertidos en títulos al portador, cuando se hubiese de hacer este reembolso.

Art. 8.º—Serán amortizadas definitivamente las inscripciones que resultasen excedentes después de negociadas las necesarias para el reembolso de la deuda flotante en la parte a que el art. 6.º se refiere.

Art. 9.º—Mientras subsistan las inscripciones en la Caja de Depósitos, los intereses que la misma perciba de la Tesorería de la deuda pública se aplicarán a cubrir los que el Tesoro haya de pagar por los de la deuda flotante.

Art. 10.º—Se autoriza al Gobierno para que sin perjuicio del derecho de descuento que las leyes de desamortización conceden a los compradores de bienes nacionales, pueda recoger en pública subasta las obligaciones necesarias, ya para reembolsar inmediatamente los 458 millones de la deuda flotante, prescindiendo de la previa compra de títulos de la deuda, a que trata el artículo 1.º, ya para aplicar los productos de la negociación a la amortización definitiva de la deuda consolidada y diferida. En ambos casos el interés de la negociación no excederá del que respectivamente devengue la deuda flotante ó del que corresponda a la deuda consolidada, según fuera la aplicación que se diere al producto de esta negociación.

Art. 11.º—El Gobierno presentará a las Cortes la distribución detallada de las obras y servicios a que se refieren los créditos abiertos por la presente ley, y dará en su consecuencia del uso que haga de las autorizaciones que por ella se le conceden en la misma forma y al propio tiempo que enajena con lo prevenido en los artículos 4.º y 10.º de la ley de 1.º de abril de 1859.

Art. 12.º—El Gobierno dictará las disposiciones conducentes a la ejecución de la presente ley. Por tanto, mandamos a todos los Tribunales, Justicias, Jefes, Gobernadores y demás Autoridades, así civiles como militares y eclesiásticas, de cualquiera clase y dignidad, que guarden

y hagan guardar, cumplir y ejecutar la presente ley en todas sus partes.

Aranjuez 4 de abril de 1861.—
Yo la Reina.—El Ministro de Hacienda, Pedro Salaverria.—De orden de S. M. lo comunico a V. U. para los efectos correspondientes.

Y la Dirección de Traslados V. U. S. para los mismos fines, debiendo prevenirle que oportunamente y verificada que sea la permutación de las fincas del clero de las respectivas diócesis que radiquen en esa provincia, se le comunicarán las órdenes para la venta.

Lo que se inserta en este periódico oficial para su publicidad. Orense abril 28 de 1862.—Francisco Javier Camuño.

CIRCULAR NÚM. 166.

De la clase de papel ó sello de que puede hacerse uso en las facturas de embarque, certificados de mercancías y mas documentos que se expresan.

Sección 6.ª—Negociado único.—Hacienda.

Por la Dirección general de Aduanas y Aranceles en 26 del mes último se dijo a este Gobierno de provincia lo que sigue:

La Dirección general de Estancos manifiesta a V. U. de mi cargo con fecha 19 del actual lo que sigue.

«Ilmo. Sr.: Por Real orden de 15 del corriente que ha sido comunicada a esta Dirección general, se ha servido resolver S. M. que en las facturas de embarque, certificados de mercancías, solicitudes de guías y en todas las peticiones que produzcan los despachos en las Aduanas, puede hacerse uso del sello, suelto engomado de dos reales, cuando dichos documentos no se extiendan en papel del sello 9.º.—Y esta Dirección general lo dice a V. U. para su conocimiento y efectos consiguientes, y como resolución a su oficio fecha 25 de enero último.»

Lo que traslado a V. U. para conocimiento del comercio y su cumplimiento por las aduanas.

Lo que se inserta en este periódico oficial para conocimiento de las personas a quienes pueda interesar. Orense abril 28 de 1862.—Francisco Javier Camuño.

SECCION DE FOMENTO.

CIRCULAR NÚM. 167.

Minas.

En el expediente de concesión de la mina de estaño denominada Santo Tomás sita en terreno foral del lugar del Viso, distrito municipal de Gomeseende, instruido en esta Sección a instancia de Don Tomás Fox, ha dictado el Sr. Gobernador la providencia siguiente:

«Admitida sin perjuicio de tercero esta investigación; publíquese en el Boletín oficial; pónganse edictos en la tabla de anuncios de este Gobierno de provincia, y remítase al Alcalde del término para que se fije en el sitio de costumbre, según dispone el art. 25 de la ley de 6 de julio de 1859; hágase saber a este inte-

resado, que en el preciso término de veinte días presente en la Sección de Fomento de este Gobierno el plano del terreno que comprende esta investigación o certificación del Alcalde del término, acreditando haber ejecutado la labor legal conforme previenen los artículos 21 y 28 de dicha ley; en la inteligencia que de no ejecutarlo le parará perjuicio.

Y en virtud de lo dispuesto en el artículo 40 del Reglamento de 5 de octubre de 1859 para la ejecución de la ley de minería vigente, se le hace saber por medio de este periódico oficial para los efectos que el mismo expresa.

Orense 29 de abril de 1862. — El Cefe de la Sección de Fomento, Carlos Vaamonde y Puga.

Don Francisco Javier Camuño, Gobernador civil de esta provincia. — Hago saber: Que en este Gobierno se está instruyendo expediente sobre concesión de dos pertenencias de la mina de estaño denominada *Santa Tomás*, a D. Tomás Fox, de nación inglesa y vecino de Plymouth. Esta mina se halla situada en terreno foral del lugar del Viso, ayuntamiento de Gomezu de la. La designación que hace el interesado es la siguiente:

Se tendrá por punto de partida los montes del Lomba, desde el se medirán en dirección norte 500 metros fijándose la primera estaca, desde ésta al E. 100 metros fijándose la segunda estaca, desde ésta al S. 300 metros fijándose la tercera estaca, desde ésta al O. 200 metros fijándose la cuarta, desde ésta al N. 500 metros fijándose la quinta, y desde ésta al E. 100 metros que terminará en la primera. Para la segunda pertenencia se partirá desde la tercera estaca y se medirán 500 metros al Sur fijándose la sexta estaca, desde ésta al Oeste 200 metros fijándose la séptima, y desde ésta Norte 500 metros que concluirán en la cuarta.

Lo que se anuncia al público a los efectos prevenidos en los artículos 25 y 24 de la ley de 6 de julio de 1859. Orense 29 de abril de 1862. — Francisco Javier Camuño.

ADMINISTRACION PRINCIPAL

DE HACIENDA PUBLICA DE LA PROVINCIA.

Relacion del número de lotes de géneros y efectos de contrabando que el día 8 del actual, a las once de su mañana y en el almacen de comisos de esta capital, se sacan a pública subasta; lo que se anuncia en el periódico oficial de la provincia en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 496 de las ordenanzas generales de Aduanas.

Número de los lotes.	Valor en reales.	Contenido de los mismos.
1	604	Sombreros y otros géneros.
2	36 25	Hierro.
3	28	Géneros.

4	63	Bacalao.
5	160	Géneros.
6	160	Idem.
7	203 50	Idem.
8	123	Idem.
8	325	Acero.
10	113	Hierro.
11	99	Géneros.
12	196	Idem.
13	73	Idem.
14	157 50	Idem.
15	96	Idem.
16	58	Idem.
17	96	Idem.
18	196	Idem.
19	185	Idem.
20	186	Idem.
21	185	Idem.
22	198	Idem.
23	178	Idem.
24	152	Idem.
25	158	Idem.
26	161	Idem.
27	176	Idem.
28	169	Idem.
29	166	Idem.
30	210	Idem.
31	157	Idem.
32	176	Idem.
33	193	Idem.
34	195	Idem.
35	176 50	Idem.
36	182 50	Idem.
37	172	Idem.
38	175	Idem.
39	170	Idem.
40	1858	Sombreros y géneros.
41	162 50	Aceite de olivo.
42	200	Géneros.
43	200	Idem.
44	158 50	Idem.
45	195	Idem.
46	171	Idem.
47	12	Hierro en potes.
48	17	Géneros.

Orense 2 de mayo de 1862.—El Administrador, P. L., Florentina de Monje.

TESORERIA

DE HACIENDA PUBLICA DE ESTA PROVINCIA.

Las Corporaciones que a continuación se expresan, por sí o persona competentemente autorizada, se servirán concurrir a esta Tesorería de provincia todos los días no feriados, a fin de recoger las inscripciones intransferibles emitidas a su favor en equivalencia de sus bienes enagenados.

Orense 1.º de mayo de 1862.—El Tesorero, José Alvarez.

Corporaciones que se citan.

Hospital de S. Roque de Orense.
de Ribadavia.
Colegio de las Mercedes.
Escuela de Lovios.
de Entrínio.
de la Rúa.
de Viana.
de Valongo.
de Porquera.
de Celanova.
de Villamarín.
de Bouslosa.
de Monterrey.
Obra-pia de Salamonde.

TERCERA SECCION.

Juzgado de paz del Barco.

Don José Fernandez Nieto, secretario del juzgado de paz del distrito del Barco de Valdeorras.—Certifico: Que en este juzgado se celebró juicio verbal entre

Manuel Fontais de Villanueva, y en rebeldía de Pedro Aira, vecino de Fontais, en el que recayó la siguiente sentencia:

En el Barco a 8 de abril de 1862, el Lic. D. Joaquín Valcarlos Ponce de Leon, juez de paz, habiendo visto el acta de juicio verbal celebrado entre Manuel Fontais de Villanueva, y en rebeldía de Pedro Aira, vecino de Fontais, por ante mí secretario dijo:

Resultando que Manuel Fontais demandó en 26 de marzo último a Pedro Aira para que le pague la cantidad de 160 reales que le adeuda de una capa de pado que le vendió.

Resultando que el demandado, sin embargo de haber sido citado en forma, no compareció al juicio.

Considerando que el demandante ha probado bastante bien la certeza del crédito reclamado, por medio de los testigos D. Pedro Santes y José Fernandez Arenas, lo cual se refrenda también de la falta de comparecencia del demandado.

Fallo: Que debe condenar y condeno a Pedro Aira a que pague a Manuel Fontais 160 reales, con mas las costas del juicio. Y por esta sentencia, definitiva, que se publique en el Boletín oficial de la provincia según lo disponen los artículos 1190 y 1195 de la ley de Enjuiciamiento civil lo pronuncia, manda y firma, de que certifico.—Joaquín Valcarlos Ponce de Leon.—José Fernandez Nieto, secretario.

Así resulta de dicho juicio, a quo me remito, y en cumplimiento de lo prevenido en la sentencia inserta, expido el presente en el Barco a 22 de abril de 1862.—José Fernandez Nieto.

Idem de Allariz, en el mismo.

Don Manuel María García, secretario del juzgado de paz del distrito municipal de la villa de Allariz.—Certifico: Que en el mismo se ha acabado expediente de juicio verbal a instancia del Lic. D. Ricardo Rodriguez Arias de esta vecindad contra D. Manuel Vazquez y su mujer Doña Rosa Fernandez, con Francisco Conde, vecinos de Turzas, parroquia de Santa Marina de Aguas Santas, en el cual se dictó la sentencia que a la letra dice así:

En Allariz a 19 de marzo de 1862. El Lic. D. Gerardo Arias, primer suplente de juez de paz de la misma, por ante mí secretario dijo:

Resultando que el Lic. D. Ricardo Rodriguez Arias, de esta vecindad, demandó a D. Manuel Vazquez y su mujer Doña Rosa Fernandez y a Francisco Conde como su fiador la entrega de una vaca con su cría novillo que de su propiedad tienen en aparcería, capitalizada en 420 reales por que los dos aparceros consortes se ausentaron de la casa dejándolas al cuidado de mangas mercenarias y se hallan en mal estado, y porque habiendo querido disponer de las cabezas el demandante propietario previa tasación, rehusó entregarlas la entrega de los aparceros su embargo de ser el mismo fiador el que pidió su entrega de orden de aquel, por cuyas razones pidió se les entregasen judicialmente previa tasación de su actual valor y del que debieran tener a hallarse bien cuidadas, y sean condenados los demandados al abono de su mitad en la diferencia y en todas las costas.

Resultando que los dos demandados aparceros se constituyeron en rebeldía y que el también demandado Francisco Conde confesó bajo juramento ser cierto todo cuanto el demandante expuso.

Resultando que el D. Manuel Vazquez y su mujer a petición del demandante fueron declarados en rebeldía y confesos en el juramento indecisorio pedido en la papeleta de demanda para que fueron citados por cédula con arreglo a la ley.

Resultando que el demandante ministró además prueba testifical; y

Considerando que el demandante ha justificado plenamente los extremos de su demanda, ya por la confesión presunta legal de los dos demandados rebeldes, ya por la expresa del otro demandado su fiador, ya en fin por la declaración unánime y contexto de los dos testigos producidos.

Considerando que el dueño siempre tiene derecho a disponer de su cosa, y el aparcerero debe respetar su derecho de propiedad.

Considerando que con arreglo a derecho el aparcerero debe prestar hasta la culpa leve y está obligado a cuidar el ganado ageno como el hombre mas diligente por la naturaleza del contrato y de la cosa.

Fallo: que debia de mandar y manda que por peritos electos en la forma legal se tasen las dos cabezas de ganado demandadas, marcando la diferencia de lo que actualmente valen a lo que debieran valer estando bien cuidadas, y hecho sean entregadas al demandante como su dueño, y condenar como condena a los demandados a su entrega en la satisfacción al dueño de la mitad de lo que resulte menos valer las dos cabezas como ganancia que debia valer y en todas las costas; pues así por esta definitiva, lo pronuncia, manda y firma y que se notifique y haga notoria con arreglo a la ley de que yo secretario certifico.—Gerardo Arias.—Manuel María García, secretario.

Y para que tenga efecto la inserción en el Boletín oficial de la provincia con arreglo a lo prevenido en el art. 1190 de la ley de Enjuiciamiento civil, se expide el presente que firma previo el V.º B.º del señor juez, estando en Allariz a 24 de abril de 1862.—Madesio Gómez Seard.—Manuel María García, secretario.

Ayuntamiento constitucional

de la villa de Barcelona.

Con sujeción a lo resuelto por Real orden de 23 de marzo próximo pasado y bajo las condiciones determinadas en el pliego expedido por el Excmo. Sr. Ministro de la Gobernación del Reino que se halla de manifiesto en la secretaría de este Gobierno, se sacará a pública subasta en las casas consistoriales de la ciudad de Barcelona a las doce del día 1.º de julio venidero el servicio del alumbrado público y particular, por gas de dicha ciudad. Lo que se anuncia para conocimiento de los que gusten tomar parte en dicho acto presentándose como licitadores.

Barcelona 19 de abril de 1862.—José Santos Quevedo.—P. A. de S. E., José María Ferrés, secretario.

SECCION DE ANUNCIOS.

DE VIGO PARA MONTEVIDEO

por el vapor de BUENOS-AIRES.

Saldrá a la posible brevedad la Corbeta «Ignacia» Capitan D. Manuel Soto, y admita algunos pasajeros, a los que se dará el buen trato que tiene tan acreditado.

La despachan sus armadores D. Francisco Tapias y Hermano, y dará razon en Orense D. Pedro San Vicente.

A voluntad de sus dueños se vende la casa señalada núm. 9 en el patin viejo, siendo su remate el 26 del actual en la referida casa.

IMPRESA DE D. CESAREO PAZ Y H.